

C.A. de Santiago

Santiago, cuatro de julio de dos mil veintitrés.

Vistos:

En la sentencia apelada, se elimina de su considerando 35°, la fracción que principia con la preposición “sin”, hasta el final del citado párrafo; se sustituye en su fundamento 36° tanto el guarismo “70.000.000”.- como su indicación en letras, por “95.000.000.-” y “noventa y cinco millones de pesos”, respectivamente y se suprime el fundamento 37°.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

1° Que esta Corte comparte los argumentos del tribunal de primera instancia para desestimar la excepción de prescripción hecha valer por el Fisco de Chile, respecto de la acción indemnizatoria esgrimida, al encontrarse fundada en hechos perpetrados por agentes del Estado, de acuerdo a los cuales tal defensa resulta improcedente, atendido el estatuto de responsabilidad del Estado y que emana de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y de la interpretación de las normas de derecho interno, conforme a la Constitución Política de la República. Al efecto, en la materia, la Excma. Corte Suprema ha señalado que *“(...) este derecho de las víctimas y sus familiares encuentra su fundamento en los principios generales de derecho Internacional de los Derechos Humanos, y la consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política.*



DECIMO SEGUNDO: *Que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. En el caso en análisis, dado el contexto en que el ilícito fue verificado con la intervención de agentes del Estado durante un período de extrema anormalidad institucional en el que representaban al gobierno de la época, y en que -al menos en el caso de autos- claramente se abusó de aquella potestad y representación, produciendo agravios de tanta gravedad como el que aquí se estudia, el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad legal de reparar dicha deuda de jure. A lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, le son vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas, página 231).*

De esta forma, el derecho de las víctimas a percibir la compensación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna, conforme a lo dispuesto en el artículo

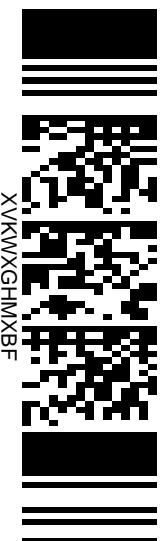


5° de la Constitución Política de la República que señala que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”.

El artículo 6 de la misma Carta Fundamental, al igual que la disposición antes referida, forma parte de las “Bases de la Institucionalidad” -por lo que es marco y cimiento del ejercicio de la jurisdicción- y ordena que “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”, indicando el deber categórico que se le impone al tribunal nacional a descartar la aplicación de las normas que no se conformen o sean contrarias a la Constitución. El mismo artículo 6 enseña que “los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”, y concluye señalando que “la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”.

De este modo, en el presente caso no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, invocadas por el Fisco de Chile, al estar en contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por Chile.” (SCS Rol 9757-2015)

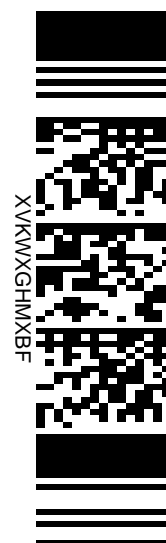
2° Que, a su turno, la excepción de reparación hecha valer tampoco será admitida. Para así resolverlo, esta Corte tiene en consideración que ni la Ley N° 19.123, que crea la Corporación



Nacional de Reparación y Reconciliación, ni los restantes cuerpos legales citados en abono de la defensa fiscal establecen la incompatibilidad entre la reparación pretendida en estos antecedentes y aquéllas que se hayan obtenido en virtud de tales leyes o normas especiales.

Asimismo, al respecto es dable señalar que las pensiones de reparación y demás medidas citadas en abono de su tesis, se adscriben en un marco general que se denomina Justicia Transicional y es desde ese contexto desde donde debemos abordar el asunto. Los alcances de esos objetivos han sido intensamente debatidos en estrados judiciales y, en particular, ante la Corte Suprema, a partir de la defensa que el Estado ha deducido con la excepción perentoria de pago, contemplada en el Título XIV del Libro IV del Código Civil, conforme a la cual el Fisco de Chile aduce que una acción reparatoria es incompatible con los fondos que fueron proveídos al afectado en el contexto de las políticas transicionales y que, de aceptarse ello, importaría una doble reparación; y que se ha complementado con la pretensión de considerar tales emolumentos en la determinación de un eventual resarcimiento.

Sin embargo, para analizar esta defensa es necesario recordar que a partir de las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación se adoptaron una serie de medidas de justicia y reparación hacia las víctimas de violencia política en el periodo histórico que va desde el año 1973 al año 1990, bajo el entendido que fue el Estado de Chile el responsable de las violaciones a los derechos humanos durante este periodo. En ese sentido, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y



Reconciliación consignó que: *“Es sabido que un mismo hecho puede generar distintas responsabilidades y, por tanto, distintas sanciones. Desde el punto de vista legal, puede haber responsabilidad penal, administrativa, civil (contractual y extracontractual) o política. Desde un punto de vista de las normas efectivas o sociales, se puede hablar de responsabilidad moral, histórica, y en un sentido distinto del término, también responsabilidad política”*. (“Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, Tomo I, Reedición, año 2007, p. 21) Para el Estado de Chile, señala el Informe, existe responsabilidad moral *“y que tal determinación no tiene efectos legales, como no sea servir de antecedente para medidas de reparación que los poderes del Estado quieran arbitrar, dentro de sus propias atribuciones. Finalmente, la Comisión deja constancia de que su determinación de responsabilidad moral es sin perjuicio de otras responsabilidades del Estado o de individuos que puedan establecerse por la Justicia o por otros órganos competentes”*.

Como se observa, los comisionados del Estado dejan constancia del fundamento de esta responsabilidad que puede dar origen a una reparación por parte del Estado, lo es sin perjuicio de otras responsabilidades, por lo que bajo estos criterios se implementaron una serie de medidas, traducidas muchas ellas en leyes como las invocadas en este caso, y la implementación de programas, como la creación de PRAIS, normativa que, además, dio origen a la citada Corporación, con el objeto de llevar adelante estas tareas y continuar la calificación de casos de violación a los derechos humanos.



En consecuencia, las leyes invocadas por el Fisco -que sólo establecen un sistema de pensiones asistenciales o bonos determinados- no contemplan incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen, lo que se concluye de la revisión de su articulado, como porque no es procedente suponer que ellas se dictaron para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, asumidas voluntariamente por el Estado, presupuesto que no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley.

Por lo dicho, admitir la defensa del Estado privando al actor del derecho a demandar, supondría una atribución no establecida por la ley, traduciéndose esta limitación unilateral en una restricción al ejercicio de un derecho fundamental -el de reparación- que debiera ser interpretada de manera restrictiva, utilizándose criterios de hermenéutica sustentados en la aplicación de “buena fe” de los tratados internacionales suscritos por nuestro país y en las disposiciones de derecho internacional consideradas *ius cogens* por la comunidad jurídica internacional, las que deben tener aplicación preferente en nuestro régimen jurídico, al tenor del artículo 5° de la Constitución Política de la República, por sobre aquella normativa de orden jurídico nacional que posibilitaría eludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno.

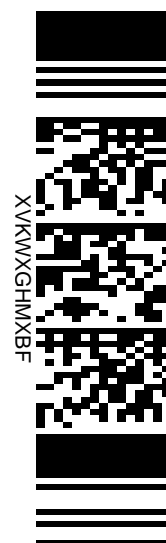
Por otra parte, sin mediar una previa determinación convencional de lo que se debe, no puede sostenerse en propiedad que haya existido pago o solución de lo que se adeuda. Dicho de otro modo, sin que preexista una obligación de objeto determinado



llamada a extinguirse, no ha podido verificarse el pago de lo que se adeuda, sin que pueda atribuirse por analogía esa naturaleza jurídica a las acciones reparatorias emprendidas por el Estado de Chile.

En consecuencia, por los razonamientos expresados, a los que se adiciona la consideración sobre el carácter genérico de las medidas que se invocan como fundamento, que constituyen una respuesta a los estándares mínimos de reparación fijados por las Naciones Unidas pero que no quedan agotadas allí; se concluye que ellas no conllevan necesariamente la mitigación individual del padecimiento del afectado, se desestima la pretensión esgrimida en orden a tener en cuenta las sumas percibidas por el demandante para extinguir la obligación de indemnizarle por el daño moral padecido, o para disminuir su entidad, en atención, precisamente, a la falta de conexión con el caso concreto de que se trata, el que es analizado con sus particularidades recién en esta sede.

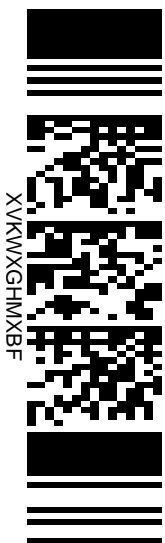
3º Que, por otra parte, el carácter de los hechos establecidos en la causa, permiten afirmar de manera inconcusa que el actor ha padecido un dolor, un sufrimiento y angustia *-trastorno de estrés post traumático crónico que a la fecha no ha recibido atención especializada, además de secuelas físicas de torturas. En el ámbito emocional, un significativo daño a nivel psíquico, secundario a trauma de carácter sexual perpetrado por agentes del Estado durante su detención-*, por lo que los montos fijados por el tribunal *a quo* resultan insuficientes para resarcirlos, considerando no sólo la privación de libertad padecida por el término de quince días, sino también la zozobra por las amenazas de muerte, los tratos inhumanos a los que fue sometido, con aplicación de corriente en



diversas partes del cuerpo, y la experiencia de abuso sexual sufrida, que a la fecha no ha podido ser procesada ni verbalizada íntegramente por él.

Sobre este último aspecto, cabe tener en cuenta que los hechos traídos a juicio y que no han sido desconocidos por la demandada, guardan relación con padecimientos que no tuvieron como objetivo la muerte del actor, sino su anulación como sujeto, de su cuerpo y de su relación con el mundo por medio del sufrimiento extremo y la fractura de sus creencias básicas, generando un cambio de sentido en su naturaleza humana, un empobrecimiento psíquico, la disminución de su capacidades, el quiebre de su proyecto vital y de sus creencias en sí mismo, en el otro y en un mundo posible, con el agravante de que el dolor era infligido de manera consciente y deliberada por otro ser humano. En la especie, tales tratamientos incluyeron aquellos de carácter sexual, que implantaron la violencia en lo más íntimo, en aquello que aún todavía no es revelado, porque las fronteras entre lo público y lo privado fueron transformadas por sus torturadores (*Cuerpo, Sexualidad y Violencia Simbólica en la Tortura Sexual*, Natalia Rodríguez Grisales, Universidad de Los Andes, octubre de 2015, URL: <http://journals.openedition.org/revestudsoc/9473>).

En tales condiciones, la tortura sexual padecida ha transformado el cuerpo del demandante en un vehículo de sufrimiento, destruyendo su autoestima, afectando sus relaciones afectivas y personales hasta el día de hoy, dando cuenta de un padecimiento que debe ser resarcido de mejor manera que la propuesta por la sentencia apelada, motivos por los cuales se



aumentará prudencialmente el monto determinado, de la forma que se dirá.

4º Que, por último, se ratificará la decisión de primer grado sobre las costas, desde que la defensa del Fisco de Chile ha sido asumida en virtud de un imperativo legal.

Por estas consideraciones, se **confirma** la sentencia apelada de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictada por el Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, en autos Rol C-29.195-2019, **con declaración**, que se eleva la suma a indemnizar por concepto de daño moral a noventa y cinco millones de pesos -(\$95.000.000.-)-

Se confirma, en lo demás apelado, la citada sentencia.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra Graciela Gómez Quitral.

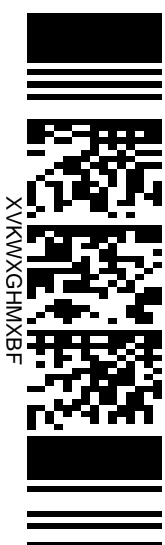
Nº Civil- 2607-2022

onunciada por la Cuarta Sala, integrada por los Ministros señora Graciela Gómez Quitral, señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero y el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, cuatro de julio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.





XVKW/GHMXBF

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Graciela Gomez Q., Veronica Cecilia Sabaj E. y Abogado Integrante Rodrigo Asenjo Z. Santiago, cuatro de julio de dos mil veintitrés.

En Santiago, a cuatro de julio de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

